

AGENDA CIUDADANA

EL PETROLEO Y LA DERECHA, EN EL ORIGEN.

Lorenzo Meyer

La Coyuntura y una Cadena Conceptual.- Estamos en la víspera del aniversario 67 de la expropiación y nacionalización petrolera decretada por el presidente Lázaro Cárdenas. Este aniversario nos toma en medio de una ausencia de consensos que, a su vez, ha generado un intenso debate sobre la manera de lograr que eso que es producto de un afortunado accidente natural –la existencia de importantes depósitos de hidrocarburos en el subsuelo mexicano--, sirva de manera óptima a nuestro interés nacional. Desde luego que la respuesta a esa interrogante está ligada a un debate más amplio: cómo se define el interés nacional que, a su vez, depende de lo que se entiende por proyecto nacional, concepto cuya precisión no puede desligarse de las ideas respecto de la naturaleza del sistema económico y político global en que estamos inmersos y el papel que en el jugamos o podríamos jugar. Y la cadena de relaciones entre los niveles de análisis puede ampliarse, pero las líneas que siguen no intentan llevar al lector por el rumbo de esas generalidades sino destacar ciertos datos e interpretaciones históricas concretas que pueden servir de contexto al debate actual, mostrando que no siempre la derecha trabajó en favor de la presencia del capital privado externo en la industria petrolera nacionalizada, que esa actitud es algo relativamente reciente.

La Situación Actual.- Por lo que se refiere a Petróleos Mexicanos (PEMEX), las cifras son muchas y dan para una variedad de interpretaciones. Veamos. El año pasado la producción de la paraestatal fue, en promedio, de 3.3 millones de barriles diarios de petróleo y el valor total de esa producción representó el 6% del PIB. La

relación de la empresa con el exterior es vital; la exportación de este recurso natural representó el 42.3% de sus ventas, y de lo exportado el 79% tuvo como destino a Estados Unidos. Con fisco tan ineficiente como el mexicano, es casi imposible pedir que las finanzas públicas no tiendan a petrolizarse: hoy, los impuestos y gravámenes a los hidrocarburos representan el 35% de los recursos del gobierno federal.

El precio del barril de petróleo mexicano está alto –pasó de 24.78 dólares en el 2003 a 31.2 dólares en el 2004-- y los expertos no prevén una baja significativa. Sin embargo, aquí, allá y acullá se insiste en que PEMEX necesita con urgencia de inversión externa para poder mantener su programa de exploración, explotación, mantenimiento e innovación. En Veracruz, por ejemplo, el presidente Fox dijo en febrero que la empresa requiere inversiones por 20 mil millones de dólares anuales y sugirió que sólo una mezcla de inversión pública y privada podría hacer frente a tamaño desafío. Que PEMEX necesita recursos, ni duda, pues tiene 11 años de rezago en tecnología y mantenimiento, pero, su situación sería otra si el fisco no le quitara a una empresa cuyas ventas son superiores a 70 mil millones de dólares anuales ¡el 114% de sus utilidades! (cifras de Carlos Morales Gil, Dirección General de Exploración y Producción, 23 de febrero, 2005), y si la actitud del liderazgo sindical y de una parte de los administradores de la empresa fuera diferente de la que históricamente ha sido: considerar al petróleo nacionalizado como una rica fuente de recursos para el enriquecimiento personal.

La Historia.- En 1938, la expropiación tomó por sorpresa a casi todos los actores involucrados y al país en su conjunto. La voluntad política del general Cárdenas en el añejo enfrentamiento entre el gobierno mexicano y los grandes consorcios petroleros, resultó mayor y más fuerte de lo que esperaban sus adversarios.

Salvo excepciones como Saturnino Cedillo, el país respaldó a un presidente decidido a hacer cumplir de manera radical lo que se había decidido en Querétaro desde 1916: que la propiedad última del petróleo era de la nación y no de los particulares dueños de los terrenos donde estaban los depósitos de hidrocarburos. Las empresas se negaron a reconocer tanto la legitimidad como la viabilidad de la expropiación, pero Cárdenas jugó bien y a fondo sus cartas, en particular aquella que identificó la expulsión de las empresas americanas y anglo-holandesas con un nacionalismo que no sólo era producto de la Revolución Mexicana sino resultado de toda la evolución histórica de México. Fue por ello que su sucesor, Manuel Ávila Camacho, justamente identificado con el vuelco a la derecha del régimen, si bien pudo atajar las reformas sociales en curso no pudo considerar seriamente la posibilidad, sugerida por los afectados, de alterar la decisión expropiatoria y nacionalizadora del petróleo.

La relación del ex presidente Cárdenas con Ávila Camacho ya no recreó la subordinación que caracterizó a la que se estableció durante el “Maximato” (1929-1935) entre el poderoso ex presidente Plutarco Elías Calles con los presidentes de la época, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez y el propio Cárdenas al inicio de su sexenio. De todas formas, la presencia política de Cárdenas en el gobierno avilacamachista fue evidente. Al finalizar 1941, el ex presidente fue nombrado jefe de la gran zona militar del Pacífico y luego, en septiembre de 1942, secretario de la Defensa Nacional. En esas condiciones, a las que hay que agregar la decisión de Washington de presionar poco a México a cambio de lograr su colaboración en la guerra contra El Eje, Ávila Camacho no tuvo incentivos para dar marcha atrás en materia de petróleo. México, con la anuencia del gobierno de

Franklin D. Roosevelt, pudo forzar a los petroleros norteamericanos a resignarse a no retornar a los campos mexicanos y aceptar una indemnización a plazos.

La Verdadera Prueba.- La auténtica prueba de resistencia de la herencia nacionalista en torno al petróleo tuvo lugar en el siguiente sexenio. Para entonces, el general ya había salido definitivamente del círculo de gobierno y la dirección de la política quedó enteramente en manos de un personaje que no sólo se identificaba más que Ávila Camacho con el ala derecha del régimen autoritario posrevolucionario, sino que él mismo ya no había participado en la Revolución: Miguel Alemán. Para entonces --1946--, ya estaba solucionado, en lo fundamental, el problema con los petroleros norteamericanos pero no con la empresa más importante del ramo en el momento de la expropiación: la anglo-holandesa “El Águila”, de la Royal-Dutch Shell. Los petroleros europeos y sus gobiernos se habían negado a aceptar la legalidad de la expropiación e intentaban mantener abierto el capítulo petrolero que habían empezado a escribir en las postrimerías del Porfiriato, cuando ellos y los norteamericanos establecieron su control sobre la industria del petróleo mexicano.

A raíz de la expropiación, México había roto relaciones diplomáticas con Inglaterra y sólo las necesidades de la II Guerra --y la actitud norteamericana-- hicieron que Londres aceptara reanudarlas en octubre de 1941, pero reservándose todos sus derechos en relación al problema petrolero. No sería sino hasta abril de 1943 cuando la Foreign Office inglesa aceptó como irreversibles “las tendencias nacionalistas modernas” en torno al petróleo en México. Sólo entonces, y a regañadientes, consintió en seguir el ejemplo norteamericano, aceptar como lícita la conducta del gobierno mexicano y negociar la indemnización. Ávila Camacho tomó entonces una posición dura: a las demandas de “El Águila” de incluir en el avalúo el

pago por combustible entregado a los ferrocarriles, México contrapuso las demandas de antiguos empleados mexicanos de “El Águila” en contra de esa empresa e impuestos no pagados. Al final no se llegó a nada.

En 1947, con Alemán y ya sin la sombra directa de Cárdenas, se reanudaron las negociaciones. “El Águila” se propuso obtener de México entre 60 y 90 millones de dólares –dos o tres veces lo que se había otorgado a los norteamericanos pues, después de todo, los anglo-holandeses habían descubierto y empezado a explotar los depósitos de Poza Rica. A esas alturas, y como resultado de la guerra, la capacidad de Inglaterra –como del resto de Europa-- para presionar a países como México por la buena o por la mala, es decir, prometer inversiones o ejercer represalias económicas, había reducido enormemente. Para entonces, el único país que realmente importaba para México era Estados Unidos, y hacía tiempo que Washington había dejado sola a Inglaterra en sus tratos con México, que incluían no sólo el tema petrolero sino la deuda externa mexicana, las indemnizaciones por daños causados durante la Revolución, la venta del Ferrocarril Mexicano y otros asuntos, como la adquisición por parte del gobierno de la Ciudad de México de la empresa de tranvías o la suerte de la Mexican Light.

Los petroleros ingleses y holandeses enviaron a un profesor, a Vincent Charles Illing, a negociar directamente con Antonio J. Bermúdez, el empresario que encabezaba a PEMEX. Illing demandó 257 millones de dólares y Bermúdez ofreció 43.9 millones. Finalmente, en agosto de ese año de 1947 se llegó a una cifra: 81.2 millones, a pagar en 15 años y con un interés del 3% retroactivo a 1938. Cuando México concluyó sus pagos, la suma desembolsada sería de 130.3 millones de dólares.

La relativa rapidez con que se llegó al acuerdo petrolero entre el gobierno de Alemán y los anglo-holandeses se explica en parte por el hecho de que el negociador mexicano, el ingeniero Bermúdez, insinuó a su contraparte inglesa que una vez superado el tema de la expropiación --lo que implicaba el reconocimiento de la legalidad de la acción tomada por México nueve años atrás--, el gobierno estaría en la posibilidad y con la voluntad de negociar un nuevo acuerdo: ¡uno que implicaría el retorno de la Shell a los campos petroleros mexicanos! Fue en base a tal promesa que el profesor Illing aconsejó a sus clientes aceptar el acuerdo con México. Lo interesante para la empresa no estaba, obviamente, en legitimar por apenas 81 millones de dólares más intereses, una expropiación ni, menos, ayudar a México a mejorar su imagen y crédito en los círculos financieros internacionales, sino en volver a abrir las puertas petroleras de México. Hasta The Times se entusiasmó con la idea del retorno y supuso que la Shell pronto operaría en México con base en el pago de regalías al gobierno (The Times, 2 de septiembre, 1947). Cuando llegó el momento de recibir el primer pago en 1948, la empresa anglo-holandesa comunicó discretamente a Alemán ¡qué estaba dispuesta a renunciar a la indemnización a cambio de que se le permitiera volver a operar en México! Un gobierno de derecha como el de Alemán rechazó la oferta, el peso del nacionalismo neutralizó la tentación.

Conclusión.- Hasta donde pudo, Miguel Alemán apoyó a la gran burguesía mexicana, vio con buenos ojos a la inversión directa extranjera --fue “Mr. Amigo”--, remodeló el liderazgo de la CTM para quitarle lo que le quedaba de radical, abrió grandes boquetes en la política agraria cardenista e hizo de la corrupción un arte, pero apenas si cedió a la presión del capital petrolero internacional. Es verdad que entre 1949 y 1951 autorizó la firma de cinco “contratos riesgo” con otras tantas

pequeñas empresas norteamericanas para que exploraran y perforaran en zonas del Golfo y vendieran su producción a PEMEX, pero no se atrevió a ir más lejos. El siguiente gobierno prefirió cerrar ya definitivamente cualquier posibilidad de que los petroleros externos reingresaran a México.

Para 1952 había quedado bien claro que el petróleo era el símbolo del nacionalismo mexicano. Hoy, hay quienes consideran que ya es tiempo de intentar, de nuevo, poner fin a la herencia cardenista ¿Tendrán éxito? la moneda esta en el aire.